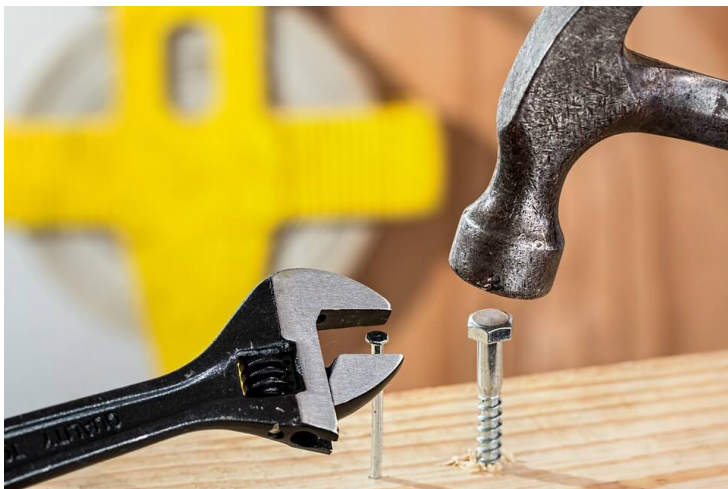


Plazos y herramientas para afrontar el pago del impuesto de sucesiones



Cuando se produce la **defunción de una persona** una de las cuestiones que se plantean a los herederos y, en general, a cualquier adquirente por alguno de los títulos sucesorios previstos en la Ley, es la de saber de qué **plazo** se dispone para autoliquidar el impuesto de sucesiones y **cómo afrontar el pago** del mismo cuando el importe a ingresar es elevado.

Así, **no es infrecuente** que surjan **disputas entre los herederos** sobre como adjudicar los bienes que componen la herencia o incluso sobre el **alcance de la voluntad expresada por el causante en el testamento**. Otras veces, simplemente, **la propia naturaleza del hecho sucesorio**, que supone tener que organizar el cambio de titularidades de bienes y derechos del difunto a aquellos que resulten herederos, legatarios etc. ya supone una **cierta dificultad** para aquellos que resulten implicados en dicho proceso de una manera directa o indirecta. En fin, **el simple pago del impuesto**, que en ocasiones puede ascender a **cantidades desorbitadas** en atención al parentesco entre causante y heredero, ya supone una dificultad en si misma.

La LISD, consciente de la **complejidad del fenómeno sucesorio**, prevé **diversos instrumentos** tendentes a **facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria** de liquidar o autoliquidar el ISD a los sujetos pasivos del impuesto.

Así, en primer lugar, la LISD prevé un **plazo** de seis meses para autoliquidar el ISD (art. 67 RISD). Dicho plazo comenzará a contar desde la fecha de defunción del causante con independencia del momento en que se acepte la herencia por los herederos, que, a estos efectos, es irrelevante.

En segundo lugar, la LISD prevé la posibilidad de **prorrogar el plazo** para liquidar o autoliquidar el ISD por seis meses más cuando, por el motivo que fuere, el plazo ordinario de seis meses resulta insuficiente para liquidar o autoliquidar el impuesto (art. 68 RISD).

La solicitud de prórroga, **y esto es importante**, debe presentarse dentro de los **cinco primeros meses de los seis que la Ley fija como plazo ordinario**. La presentación de la solicitud de prórroga fuera del plazo de los cinco meses será desestimada de plano. La prórroga del plazo para liquidar o autoliquidar el ISD **devengará intereses de demora**, a contar desde la finalización del plazo ordinario de seis meses.

En tercer lugar, la LISD regula asimismo la posibilidad de **suspender el plazo para liquidar o autoliquidar el ISD**, ya sea el ordinario o el prorrogado, cuando exista litigio sobre cuestiones relacionadas con el testamento (juicios de testamentaría y/o procesos penales relativos a la falsedad del testamento), esto es, debe tratarse de **cuestiones contenciosas** relacionadas con el proceso sucesorio (art. 69 RISD). La presentación de la solicitud de suspensión, una vez que esta se estima, suspende el plazo para autoliquidar.

La suspensión del plazo para liquidar o autoliquidar supone que durante dicho periodo **no se devenguen intereses de demora**, a diferencia de la prórroga.

En cuarto lugar, la LISD prevé la posibilidad de que la oficina gestora competente **autorice a las entidades financieras** (a solicitud de los interesados) para enajenar valores a nombre del causante y, con cargo a su importe o al que hubiere en las cuentas del mismo, **librar talones a nombre del Tesoro Público por el importe exacto de las liquidaciones o autoliquidaciones o bien, simplemente, pagar contra las cuentas del causante si hubiere líquido suficiente** (art. 80.2 RISD).

Este instrumento es **muy práctico** ya que permite pagar el ISD contra las cuentas del causante sin tener que esperar a liquidar el

impuesto para disponer, ni que sea para pagar el impuesto, del líquido que hubiere en las cuentas del difunto. En este sentido, hay que tener presente que, de acuerdo con el art. 91.4 del RISD, **como regla general**, ninguna entidad pública o privada podrá acordar la entrega de bienes a personas distintas de su titular **sin que se acredite previamente el pago del impuesto**, a menos que la Administración lo autorice, como el caso que nos ocupa.

En quinto lugar, la LISD prevé la posibilidad de **pago de la deuda tributaria mediante la entrega de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español** (o bien de la Comunidad Autónoma correspondiente) que estén inscritos en el correspondiente catálogo o inventario (art. 80.3 del RISD).

En sexto lugar, la LISD prevé la posibilidad de realizar **liquidaciones o autoliquidaciones parciales a cuenta** de lo que salga a ingresar de manera definitiva en concepto de ISD **a los solos efectos** de cobrar seguros de vida, créditos del causante, haberes devengados y no percibidos por el mismo y para retirar bienes, dinero o valores (arts. 78 y 89 del RISD). **La finalidad de dicho instrumento es la de facilitar liquidez al sujeto pasivo del impuesto** para afrontar el pago del ISD que, en ocasiones, puede suponer el abono de cantidades importantes.

Tanto la liquidación como la autoliquidación parcial a cuenta deberán realizarse **sin aplicar reducción de ningún tipo** sobre los bienes que se liquidan o autoliquidan.

En séptimo y último lugar, la LISD prevé la posibilidad de **aplazar o fraccionar** la cantidad que salga a pagar en concepto de ISD (arts. 81-85 y 90 del RISD). Así, en **los supuestos de liquidación**, la LISD, bajo diversos condicionantes, regula el aplazamiento de pago de la deuda tributaria hasta un año o bien la posibilidad de fraccionarla por cinco anualidades.

Para los supuestos de autoliquidación, sin perjuicio de la aplicación de la normativa sobre aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias prevista en el RGR, se podrá solicitar el aplazamiento o el fraccionamiento de la deuda tributaria previsto en la normativa de la LISD (aplazamiento de un año o fraccionamiento por cinco anualidades) siempre y cuando se presente dicha solicitud **dentro de los cinco primeros meses** del plazo de seis meses que hay para autoliquidar el impuesto.

La LISD completa la regulación con diversos **supuestos especiales** de fraccionamiento y aplazamiento de la deuda tributaria. Finalmente, **debe tenerse presente que el ISD es un impuesto que está cedido a las CCAA que, entre otras cosas, tienen competencia normativa sobre cuestiones relativas a la gestión del tributo**. Es por ello que debe tenerse presente la normativa que hayan dictado al respecto ya que puede matizar la prevista en la normativa estatal, que será de aplicación en tanto en cuanto la Comunidad Autónoma no haya legislado sobre la misma. Si ésta ha legislado sobre la cuestión, esta última será de aplicación **preferente** en relación a la normativa estatal.